

Gabriel Flores

La recuperación de la Unión Europea para la ciudadanía

Ezkerretik Berrituz, septiembre de 2019.

La ciudadanía europea vive actualmente una compleja relación con la UE. La gran mayoría sigue apoyando el proyecto de unidad europea puesto en marcha hace más de 60 años, así lo refleja el último Eurobarómetro de abril de 2019: en el caso de tener que decidir en un referéndum la relación de su país con la UE, la mayoría de la ciudadanía de la UE-27 (sin incluir al Reino Unido), un 68%, votaría a favor de permanecer, frente a un 14% que apostaría por abandonarla; en España, esos resultados son más abultados, un 74% a favor de la permanencia, frente a un 10% que se inclinaría por dejarla.

En los últimos años, los sucesivos números del Eurobarómetro también indican que han crecido las dudas y los temores respecto a la UE y el euro. Dudas que, entre otros factores, pueden achacarse al desapego de las instituciones comunitarias con la suerte de los Estados miembros más endeudados o con mayores desequilibrios en sus cuentas públicas y exteriores. Los países del sur de la eurozona se han visto obligados a realizar duros ajustes antipopulares, recortando gastos públicos, salarios e importaciones para recuperar los equilibrios macroeconómicos básicos, y se sienten injustamente tratados por las instituciones comunitarias.

En los países del norte de la eurozona, que desde hace una década acaparan la mayor parte de los beneficios y ventajas de pertenecer al mercado único y al euro, crece también el desasosiego de la ciudadanía ante el temor de que la UE acabe transformada en una unión de transferencias que convierta sus ahorros en ayudas permanentes a los países del sur, dificultando así que acometan las reformas de carácter estructural que, según el pensamiento económico dominante, les permitirían aumentar su competitividad, elevar la gama de su oferta productiva, equilibrar sus cuentas o generar más y mejores empleos. Los países del norte de la eurozona liderados por Alemania han visto reforzada su hegemonía política y económica gracias a la crisis global que estalló en 2008 y rehúsan apoyar los cambios institucionales y de política económica que son necesarios para que el mercado único y el euro funcionen en beneficio de todos los socios o simplemente, en áreas como la unión financiera, vuelvan a funcionar.

Tampoco ayuda a generar confianza en la ciudadanía de los países del sur de la eurozona que las promesas de convergencia en los niveles de renta se hayan esfumado o que, desde el estallido de la crisis global de 2008, aumente la desigualdad entre los diferentes grupos y clases sociales en cada Estado miembro y prime la divergencia en las especializaciones y estructuras productivas y el consiguiente distanciamiento de las rentas medias por habitante respecto a las de los países del norte.

Las dudas y una sensación de malestar difuso con la actuación y con la inacción de la UE desde el inicio de la Gran Recesión dieron un salto de calidad a partir de la crisis migratoria y de refugiados de 2015, año a partir del cual la ciudadanía europea colocó a la inmigración como el primer problema que debe afrontar la UE. A finales de 2018, la inmigración seguía siendo para un 40% de las personas encuestadas la gran preocupación, muy por encima del terrorismo yihadista (20%), los déficits presupuestarios (19%), la situación económica (18%), el cambio climático (16%), el paro (13%) y otros. La ausencia de una política migratoria común y la ceguera voluntaria con la que los líderes comunitarios se han desentendido del cementerio en el que se ha convertido el Mediterráneo han tenido el doble efecto de reforzar las ideas xenófobas y los nacionalismos identitarios excluyentes y, de forma complementaria,

deteriorar la confianza de las corrientes sociales progresistas en la UE y sus políticas. Instituciones y líderes comunitarios se han escabullido de sus obligaciones en defensa de los derechos humanos y no se han implicado en la tarea de impedir el maltrato con el que se recibe o se rechaza a las personas migrantes: subcontratan campos de concentración de refugiados en Turquía, financian guardacostas de grupos militares libios en las tareas de rescate y devolución a los campos de concentración de naufragos que huyen del infierno en la tierra y dejan al arbitrio de los gobiernos de los Estados miembros y de sus capacidades de gestión y financiación el rechazo o la acogida en condiciones lamentables de las personas migrantes en busca de refugio, trabajo o mejor suerte que intentan entrar en territorio comunitario.

Así es la complicada coyuntura que vive hoy la UE, que incluye, además, una palpable desaceleración del crecimiento económico y la incertidumbre que genera un Brexit sin acuerdo, con impactos negativos y riesgos de difícil cuantificación. Ante la situación de malestar, preocupación y división de la ciudadanía, la UE parece sestear, sin que las inadecuadas políticas económicas, insuficientes reformas institucionales y diferentes expectativas de líderes y gobernantes contribuyan a que pueda sacudirse la modorra. La lógica funcionalista de pequeños pasos o lenta acumulación de intereses económicos compartidos que favorecerían una unión cada vez más estrecha de los pueblos europeos y terminarían concretándose, en su última fase, en fórmulas de unidad política de carácter supraestatal o federalización de características imprecisas, ha fracasado. La UE se debate ahora entre varias fórmulas contradictorias de seguir siendo y el dejar de ser.

Por una Unión Europea cohesionada y solidaria que sigue siendo necesaria

La UE y el proyecto de unidad europea están en un momento crucial, en una encrucijada caminos que se pueden resumir, para ayudar a distinguir sus características principales, en tres: uno, relanzar el proyecto de unidad europea, reafirmando sus rasgos sociales y democráticos y los principios de solidaridad y cohesión que posibilitaron su extensión a la mayor parte de los países europeos, para lo que sería necesario salvar las múltiples resistencias y obstáculos que dificultan la realización de las imprescindibles reformas institucionales y flexibilizar y acomodar los objetivos, reglas, políticas y principios económicos a las distintas necesidades y situaciones de las economías de los Estados miembros; dos, perseverar en la parálisis de los últimos años y en un esfuerzo reformista de mínimos que no permitirían superar el deterioro y la descomposición que se ha hecho visibles desde hace una década; y tres, aceptar las tendencias centrífugas que alientan las derechas conservadoras y las extremas derechas neosoberanistas que intentan cambiar las prioridades, la orientación y la sustancia del proyecto de unidad europea, reduciendo su alcance a una unión de Estados soberanos que recuperen la mayor parte de las competencias cedidas. En esta tercera opción, la acción política común se reduciría a la defensa de una idea cerrada, excluyente y muy conservadora del ser y sentirse europeos por parte de un poder comunitario más moral que político y a mantener, en el terreno económico, un mercado común permeable a las decisiones proteccionistas puntuales de algún Estado miembro y en el que prevalecerían la competencia laboral y fiscal entre los socios y una mínima regulación que permitiría obtener mayores beneficios a los grandes grupos económicos nacionales y europeos.

Pese al distanciamiento con la UE de una parte minoritaria pero significativa de la ciudadanía y a pesar de la acumulación de insuficiencias institucionales, errores de política económica y divergencias productivas y económicas que caracterizan su trayectoria en la última década, la UE sigue conservando características positivas que no tienen parangón en ninguna otra región del mundo: paz, democracia representativa, estabilidad, desarrollo económico y un espacio de protección social y derechos de la

ciudadanía que, pese a su paulatina reducción, aún dispone de una amplia oferta de bienes públicos y mecanismos nacionales y regionales (o autonómicos) de protección social y redistribución de la renta que mitigan el aumento de la desigualdad social que promueven las generalizadas políticas amigables con los intereses de los grandes grupos empresariales y la estrategia de austeridad y devaluación salarial impuesta. La comprensión de la importancia de esos bienes, valores y derechos conquistados y la acción política destinada a su defensa y reforzamiento son las guías básicas de la posición de las fuerzas progresistas y de izquierdas que quieren responder a las necesidades y demandas de la mayoría social y recuperar la UE para la ciudadanía.

La UE es también una densa y compleja red de vínculos productivos, financieros, económicos, humanos, culturales y emocionales que se desarrollaron a fuego lento durante siglos y de forma más intensa tras la desolación y destrucción que produjo la Segunda Guerra Mundial. La protección de esos vínculos, fortaleciéndolos y extendiéndolos, es también una tarea clave de las fuerzas progresistas y de izquierdas.

La globalización neoliberal con mínimas reglas que ha dominado la marcha de la economía mundial desde los años 80 del pasado siglo puso la actividad productiva y financiera al servicio de las grandes potencias y los capitales financieros y productivos transnacionales, sin tener en cuenta los intereses particulares, nacionales, de la mayoría de los países ni su voluntad soberana; sobre todo, cuando esa voluntad se concretaba en decisiones políticas que pretendían gobernar su inserción en los mercados globales y modular sus niveles de exposición a los flujos económicos internacionales, especialmente en el caso de unos movimientos financieros que encerraban y encierran un enorme potencial desestabilizador. Ese modelo de globalización ha entrado en crisis por la acción de EEUU, la gran potencia mundial que, paradójicamente, consiguió los mayores beneficios del despliegue de los mercados globales. Trump y las fuerzas económicas que le apoyan han roto con todos los condicionantes, reglas y organismos multilaterales constituidos y tratan de conseguir más ventajas de su posición de fuerza, amenazando a sus socios con acciones unilaterales de carácter comercial o financiero y desatendiendo todo compromiso que suponga, como en el caso de los acuerdos multilaterales para frenar el cambio climático, una atadura que dificulte la lógica de acumulación de capital, que es la única lógica que entienden.

Una Europa unida tendría capacidad para proteger a los Estados miembros de ese nuevo modelo de globalización desregulada y sin instituciones multilaterales que se intenta afirmar. Y podría influir y modificar los rasgos más perjudiciales de una nueva fase de la globalización en la que los capitales productivos y comerciales estadounidenses y el capital financiero transnacional tratan de imponer sus condiciones e intereses. La desunión europea o el deterioro de la actual UE supondrían un gran inconveniente para los Estados miembros, que tendrían que afrontar por separado y, en la mayoría de los casos, en condiciones de extrema debilidad los desafíos de una nueva globalización asentada, exclusivamente, en la razón de la fuerza de una o varias superpotencias.

¿Cómo recuperar el proyecto de unidad europea?

La defensa de la unidad europea y una renovada UE no es posible con proclamas de más y mejor Europa vacías de contenidos ni, menos aún, desde un resistencialismo de denuncia; requiere construir alianzas amplias y propuestas viables que permitan avances y mejoras palpables en la situación de la mayoría social.

La UE puede ser, pese a sus insuficiencias y errores, una protección de la ciudadanía europea frente a los convulsos tiempos que se avecinan, en los que a la crisis de la globalización neoliberal y a las guerras comerciales y cambiarias en ciernes, hay que

añadir las crisis militares y geopolíticas en activo, las resistencias políticas y los intereses económicos que traban las acciones encaminadas a cumplir los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o los presumibles avances de un proceso ya en marcha de desindustrialización mundial que anticipa una nueva era de sustitución de empleos dignos en el sector industrial por trabajos indecentes en los servicios poco sofisticados que, dejada de la mano de un poder regulador público, acrecentará aún más la bipolarización del mercado laboral, con la consiguiente agravación de la desigualdad social y los riesgos de desestabilización social y crisis políticas.

Las izquierdas y las fuerzas progresistas de carácter europeísta que intentan impulsar las reformas de las instituciones y políticas comunitarias no podrán sostener su acción en un programa acabado de transformación sustancial de la UE y la eurozona, porque esas reformas pasan por la negociación y el compromiso de los principales grupos políticos europeos. Muy difícil si se tiene en cuenta la composición del recientemente constituido Parlamento Europeo, donde tanto la socialdemocracia como la Izquierda Unitaria han retrocedido (la única excepción a la mayor debilidad de las fuerzas progresistas es el grupo de Los Verdes) mientras las fuerzas neosoberanistas de derechas y extrema derecha han aumentado su presencia y capacidad para bloquear las grandes iniciativas de reforma.

A pesar de esa mayor debilidad de las fuerzas progresistas y de izquierda, no hay ninguna razón que justifique la renuncia a intentar recuperar la UE para la ciudadanía; tampoco puede llevar a olvidar las reformas con mayor carga transformadora, por mucho que se antojen de improbable consecución. De esas reformas sustanciales, pueden servir de ejemplo las siguientes: emisión de títulos comunes de deuda pública, que servirían para mutualizar y reducir riesgos del conjunto de países de la eurozona; ampliación del único objetivo del Banco Central Europeo, añadiendo al control de la inflación la reducción de las tasas de desempleo; establecimiento de reglas presupuestarias menos arbitrarias en sus objetivos cuantitativos, más creíbles y mejor diseñadas que las actuales; incremento de los presupuestos comunitarios con el objetivo de llevar a cabo una mayor inversión en terrenos que son claves para aumentar la productividad global de los factores productivos, como los de la mejora de la educación y la formación y cualificación laboral, la modernización de las estructuras e infraestructuras productivas o el aumento del peso de las energías renovables para lograr los objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero que marca el Acuerdo de París ratificado por la UE en octubre de 2016. El apoyo público a la investigación y aplicación de nuevas tecnologías, materiales y energías es también clave para favorecer una transición ecológica que, además de repartir de forma equitativa sus beneficios, no descargue el grueso de sus inevitables costes sobre los sectores populares.

De igual forma, se puede y se debe seguir insistiendo en la necesidad de llevar a cabo un acto democrático de refundación de la UE capaz de proporcionar un nuevo impulso existencial al proyecto de unidad europea basado en el aumento de la oferta de bienes públicos europeos, la creación de empleos decentes, la igualdad de género en los niveles salariales y el acceso al empleo, una política migratoria responsable y respetuosa con los derechos humanos o una mayor implicación en la construcción de un orden mundial de carácter multilateral más cooperativo, seguro, democrático e inclusivo.

Pero esas reformas institucionales y de política económica sustanciales, que son necesarias para consolidar un proyecto de unidad europea que sirva para mejorar la vida, la seguridad y las expectativas de la mayoría de la ciudadanía europea, cuentan con una oposición gubernamental, política y social muy fuerte, que las hace inviables en

el corto plazo. Es necesario reconocer las enormes dificultades que tiene poner de acuerdo a buena parte de los gobiernos de los 28 o 27 países de la UE (si el Brexit termina por hacerse realidad) y conseguir una mayoría suficiente de apoyos en la ciudadanía europea y en el heterogéneo mapa de fuerzas políticas europeas. No se trata de renunciar a nada o de contentarse con matizar, justificándolas, la acción y las ideas de las fuerzas políticas dominantes, se trata de ser conscientes de las escasas posibilidades de llevar a cabo una reforma radical de la UE, por la debilidad política, social y electoral de las fuerzas que están por la labor.

Abrir caminos, no quedar encerrados en nuestras verdades

En lugar de olvidar los objetivos de una reforma sustancial de la UE, porque hoy son poco viables o directamente imposibles, se trata de colocarlos en su justa posición, la de promover el conocimiento público de sus contenidos, avanzar en su concreción técnica y desarrollar su viabilidad política, sabiendo que su realización sólo será posible cuando consigan el apoyo social y electoral de la mayoría. La intención es abrir puertas y caminos, en lugar de cerrarse en unas verdades que sólo entiende una minoría.

No tiene sentido atrincherarse en la denuncia de la UE y el euro y clamar por una salida que, además de ser una aventura muy arriesgada que es rechazada por la mayoría, dificulta conectar la crítica razonada a los errores e insuficiencias de la UE con la ciudadanía, que sigue considerando útiles el proyecto de unidad europea y sus instituciones. Más comprensible resulta seguir defendiendo un horizonte a medio plazo de transformación en profundidad de las instituciones y políticas europeas, al tiempo que esa perspectiva se completa con reformas que puedan ser viables de forma inmediata, porque cuentan con mayores apoyos de la ciudadanía, ofrecen oportunidades, bienestar y futuro a las personas y sirven para demostrar que la mejora de las condiciones de vida es compatible con una actuación responsable de la UE en la defensa efectiva de los derechos humanos y el derecho internacional en el tratamiento de las personas migrantes o en busca de refugio político. Sólo así será posible ganar el apoyo consciente y activo de la ciudadanía a un europeísmo inclusivo que respeta la soberanía nacional de los Estados miembros en aquellos temas, políticas y competencias que no hayan sido cedidas a las instituciones europeas, promueve el bienestar, impulsa la cohesión y la solidaridad frente a la desigualdad y sirve como ejemplo de buenas prácticas sobre las ventajas que implica fortalecer la UE y recuperarla para la ciudadanía.

La extraordinaria dificultad de la tarea de transformar la UE exige apreciar los pequeños pasos, por mucho que se consideren insuficientes, que sirvan para desbloquear la situación actual y situar la necesaria reforma de la eurozona y la UE, además de en el debate estratégico y cultural, en la acción práctica de una izquierda que demuestre su capacidad para llevar a cabo cambios que permitan a la ciudadanía palpar la utilidad de sus propuestas e ideas.

Un buen ejemplo del tipo de reformas a impulsar de forma inmediata sería alguna de las modalidades del seguro de desempleo europeo que ya han sido planteadas y debatidas en instancias comunitarias y que, de aplicarse, supondría un avance importante de las ideas de solidaridad, cohesión y especial atención a los problemas de la ciudadanía que más lo necesita, además de un buen instrumento anticíclico que contribuiría a considerar con más atención por parte de las autoridades europeas y nacionales las bajas tasas de actividad y altas tasa de desempleo que sufren algunas economías comunitarias, como la de España.

Al igual que en el tema del seguro de desempleo europeo hay otros muchos ejemplos de reformas que beneficiarían a sectores sociales significativos, harían más visible la utilidad de la UE y contarían con un amplio apoyo social y niveles salvables de oposición política. Propuestas que hay que sacar a la luz del debate público para que la sociedad pueda valorarlas y, en su caso, presionar a favor de su aprobación: aumento de los fondos estructurales y de cohesión que promuevan la convergencia de los Estados miembros menos desarrollados; progresiva armonización tributaria que impida la competencia a la baja de la presión fiscal sobre los beneficios empresariales y las rentas del capital o en las cotizaciones a la seguridad social a cargo de las empresas; cambios legales que refuercen la negociación colectiva y reviertan las reformas estructurales del mercado de trabajo que han supuesto eliminación de derechos laborales, más precariedad o mayor presión sobre las rentas del trabajo; relajación de los objetivos de consolidación fiscal, aunque conviene aclarar que esa relajación no supone abogar por déficits públicos elevados o considerar inocuo o, mucho menos, conveniente el aumento de una deuda pública que en muchos socios se sitúa ya en niveles difíciles de gestionar ante el más mínimo incremento de las tasas de interés; reconstrucción de un mercado único financiero, que ha dejado de funcionar en la UE, con objeto de favorecer que el excedente alemán y holandés no siga financiando con mínimas tasas de rentabilidad la deuda pública estadounidense y vuelva a financiar las inversiones útiles en las economías de sus socios de la UE; nueva metodología en el control del gasto público, menos ideologizada y arbitraria que la actual, que suponga un examen más detenido de su cuantía y su composición, distinguiendo las inversiones que permiten mejorar y modernizar el aparato productivo o forman parte del necesario rescate social, que deberían aumentar, de los gastos que no añaden nada positivo o no son útiles, que deberían reducirse.

La tarea consiste en identificar qué reformas poseen parecidas características: pueden aprobarse a corto plazo, aumentan la estabilidad de la economía comunitaria, son consideradas útiles por la mayoría, mejoran el funcionamiento y la eficiencia del mercado único y el euro y sirven como ejemplo de las ventajas de aplicar los principios de solidaridad y cohesión.

La alternativa a esta relación de reformas que deben contar con el imprescindible concurso de la ciudadanía para ser viables y abrir espacios a los cambios posibles es el aumento de los riesgos de nuevas crisis financieras y de deuda pública de los países del sur de la eurozona que, de afectar con más intensidad que hasta ahora a Italia o contagiar a España, pondrían en cuestión al euro e impulsarían una mayor heterogeneidad estructural que provocaría un avance imparable del populismo xenófobo y proteccionista y una intensificación de las crisis de representación y desestabilización política que ya sufren muchos países de la UE.

10 de agosto de 2019